

Periodismo y transición: de la recuperación pluralista al *shopping* comunicacional

La transición comunicacional que se inicia en la Argentina hacia 1983 incluye dos tramos bien definidos y quizá paradójicos: el de la recuperación democrática de las voces plurales e independientes, y el de la reconversión del sistema en un *shopping* multimediático, en el que conviven discursos alternativos y ofertas tecnológicas regentadas por grandes corporaciones de la información y la industria cultural.

El régimen militar que gobernó a la Argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 no se comportó en el terreno comunicacional de manera novedosa. Encuadrado en sus líneas generales en la difundida ideología de la Seguridad Nacional, sus métodos represivos y manipulatorios no difirieron sustancialmente de los que se implementaron en este terreno, para la misma época, en países como Brasil, Uruguay y Chile. No estará de más, sin embargo, una semblanza de los modos operativos específicos que la dictadura implementó (o estimuló) en un país como la Argentina.

El denominado Proceso de Reorganización Nacional heredó en marzo de 1976 un esquema de medios que en cierto modo determinó comportamientos informacionales esencialmente represores y manipulatorios, pero no uniformes. El conjunto de los medios gráficos de la época pertenecía —como ha sucedido tradicionalmente desde fines del siglo XIX— a empresas privadas familiares, que con distintos matices internos o regionales son un fiel reflejo de los diferentes grupos de poder económico que operan en el país. En el campo específico de la radio y la televisión cabe consignar, por el contrario, que un alto porcentaje de las empresas concesionarias privadas que

operaban en ambos ramos había sido estatizado en 1974, al caducar las correspondientes licencias de explotación.

La alianza militar-empresaria contaba, de esta manera, con una trama comunicacional suficientemente dúctil para acompañar, en este rubro, su proyecto de desmontaje compulsivo del anterior esquema de una Argentina industrialista y distributiva.

El clima de represión y tutela, desde luego, no pasó desapercibido. En un precursor y celebrado artículo periodístico de agosto de 1979 la escritora María Elena Walsh señalaba: «Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan en las Aduanas... Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen a la mesa de Martínez de Hoz... El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso el que calla —apaga— no otorga. En otros tampoco: el que calla es porque está muerto, generalmente de miedo»¹.

En un importante trabajo de análisis de las mediaciones², la investigadora argentina Patricia Terrero sistematizaba algunos de los mecanismos de manipulación y control informacional desplegados por el régimen militar entre 1976 y 1983, entre ellos la táctica de bloqueo de la información y las estrategias de despliegue y consolidación de la ideología del régimen.

Frente a este panorama más o menos homogéneo y hegemónico, los medios gráficos privados aportaron por su parte cuotas muy variadas de adhesión explícita, cautela autocensoria o crítica asumida frontalmente, si bien desde perspectivas o con estilos no siempre coincidentes. En este plano hicieron sentir su peso la franca crudeza represiva de algunos momentos, la confrontación de intereses expresados por los medios con proyectos o decisiones del poder económico, la paulatina reorganización del campo popular y fisuras en la propia cohesión interna de la alianza militar-empresaria o del mismo campo militar.

El *Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina*, producido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en abril de 1980, destacaba la actitud de «extremada prudencia» de los medios en «el juzgamiento de la política y los actos de gobierno», actitud que no se limitaba al «juzgamiento», que pertenece, por otra parte, a la esfera de la opinión axiológica, sino a la misma información objetiva y neutral sobre esos actos y políticas.

Los diarios *Buenos Aires Herald*, *Clarín* y *La Prensa* mantuvieron, sin embargo, una actitud más independiente frente al esquema restrictivo diseñado por el poder militar para el campo comunicacional. *Buenos Aires Herald*, un diario de pequeño tiraje editado en inglés, apoyó en lo esencial

¹ María Elena Walsh, «Desventuras en el país jardín de infantes. La censura y sus prejuicios en nuestra cultura», en *Clarín*, Buenos Aires, 16/8/1979.

² Patricia Terrero, «Comunicación e información por los gobiernos autoritarios», en *Comunicación y democracia en América Latina*, Lima, DESCO-CLACSO, 1982.

el diseño de la política económica del gobierno, pero criticó con regularidad la violación de derechos humanos. *La Prensa*, liberal y antiperonista militante, censuró algunos aspectos de la economía diseñada por Martínez de Hoz y mantuvo una línea constante de información y denuncia de las mismas violaciones. *Clarín*, por su parte, centró sus diferencias en la crítica alternativa a la política económica de los militares, ejercitada desde una perspectiva desarrollista que predominaba por entonces en el diario. Medios como *La Nación*, *La Razón*, *Crónica*, *La Opinión* (intervenida por los militares), *Convicción* y las revistas de editorial Atlántida (como *Gente*, *Para Ti* y *Somos*), mantuvieron, por el contrario, una relación de consentimiento con el régimen, con matices y particularidades de intensidad variada.

Entre 1976 y 1983 la dictadura militar argentina provocó la desaparición de un alto número de periodistas, tal como lo documentaba en 1986 la Asociación de Periodistas de Buenos Aires en su libro *Con vida los queremos*. En la lista de la APBA figuraban, entre otros, Haroldo Conti, Julián J. Delgado, Alicia Eguren, Marcelo Gelman, Diana Guerrero, Susana Lugones, Héctor G. Oesterheld, Carlos Pérez, Enrique Raab, Roberto Santoro, Rodolfo J. Walsh, Tilo Wenner, etc. Esas desapariciones formaban parte de una política represiva que se mostró especialmente cruenta con los militantes gremiales peronistas, los activistas de la juventud comunista, algunos remanentes de la guerrilla y todos aquellos a los que el régimen, con evidencias o sin ellas, juzgaba como potencialmente peligrosos.

Las «listas negras» del Proceso marginaron a su vez a centenares de figuras, algunas de las cuales encontraron cabida ocasional en diarios y revistas pero no en los medios electrónicos de gran masividad.

Si en una primera etapa de la transición el acento recayó previsiblemente sobre la denuncia del *status* comunicacional represivo y sobre la búsqueda de carriles restauradores de flujos democráticos y pluralistas, en un segundo momento el campo de las demandas sociales y el de las mecánicas de producción y circulación comenzaron a su vez a experimentar modificaciones que tenían que ver con el nuevo sesgo social, ideológico y tecnológico que comenzaba a advertirse, entre otros, en los territorios de la comunicación.

La línea divisoria de aguas entre estos dos momentos de la transición—ubicable en algún punto más o menos difuso de las postrimerías de los años 80— es tan tajante que para muchos observadores, como veremos, la segunda etapa puede ser considerada, a su vez, como una transición particular hacia otra cosa manifiestamente distinta.

La restauración de los cauces constitucionales y democráticos a partir de 1983, con la elección presidencial del radical Raúl Alfonsín, comenzó a suturar un tejido comunicacional profundamente desgarrado por la represión, la desinformación planificada, las campañas de acción psicológica,